



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTICINCO (25) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D. C., Doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

| | |
|---------------------|--|
| PROCESO No.: | 11001-33-35-025-2023-00367-00 |
| ACCIONANTE: | ROSMER ENRIQUE CALATAYUD JIMENEZ |
| ACCIONADO: | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| ACCIÓN: | TUTELA-Medida provisional |

Procede el Despacho al estudio de admisibilidad de la acción de tutela de la referencia y al examen de la medida provisional solicitada por la parte actora.

1. Estudio de admisibilidad.

El señor **Rosmer Enrique Calatayud Jiménez** instauró acción de tutela contra la **Registraduría Nacional del Estado Civil** en la cual depreca la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la personalidad jurídica.

En tal virtud, el Juzgado ordenará la notificación de las entidades que guarden competencia respecto de las pretensiones solicitadas.

2. De la medida provisional solicitada en la acción de amparo.

El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 previó que, desde la presentación de la solicitud de tutela, el juez constitucional cuenta con la posibilidad de *“dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho [presuntamente vulnerado] o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados”*.

Sobre tal articulado, la Corte Constitucional ha señalado¹ que “[l]a protección provisional está dirigida a: **i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de**

¹ [Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión; Sentencia T-103 de 23 de marzo de 2018; Expediente T-6.448.561; M.P. Dr. Alberto rojas Ríos.](#)

impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante”.

No obstante, esa Corporación también ha indicado que “[l]as medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada.

Descendiendo al caso bajo examen, se tiene que la parte accionante requiere del Despacho lo siguiente:

De conformidad con el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, se solicita a su Señoría el decreto de una medida provisional, consistente en ordenar la suspensión del acto administrativo, en lo que me atañe.

Lo anterior, por cuanto existe un riesgo inminente de que se cause un perjuicio irremediable, a saber, que la totalidad de mi vida civil, mis posibilidades de celebrar y cumplir contratos, de pagar los impuestos, de disponer de mi dinero, e incluso de mi libertad personal, está suspendida injustamente. El bloqueo a la totalidad de mi vida es tal que necesito urgentemente se me protejan mis derechos fundamentales, incluso, durante el trámite esta acción de tutela.

En atención a lo anterior, el Juzgado vislumbra que la solicitud de medida provisional no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, pues no se observa un peligro inminente que pueda causar un daño irremediable o irreparable que no pueda ser eventualmente corregido en sentencia, comoquiera que, en la acción de amparo no hay pruebas del peligro y las amenazas alegadas por el actor.

Aunado a lo anterior, en los hechos de la demanda de tutela el actor señala que hay actuaciones administrativas proferidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, esto es, la **Resolución 5311 de 7 de marzo de 2023**, la cual deberá ser analizada conforme a la normatividad vigente en aras de adoptar una decisión de fondo,

En este mismo sentido, reitera el Juzgado que la acción de tutela implica el estudio de fondo de la totalidad de los supuestos fácticos planteados inicialmente y el material probatorio allegado tanto por el actor como por la accionada; por lo tanto, se requiere un estudio más estructurado sobre la violación predicada y una valoración

más exhaustiva que lleve al Despacho a determinar si existe violación de derechos fundamentales.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda – Oral,**

RESUELVE

1.- ADMITIR la acción de tutela promovida por **Rosmer Enrique Calatayud Jiménez** contra la **Registraduría Nacional del Estado Civil** y, en consecuencia:

1.1. NOTIFÍQUESE personalmente y en forma inmediata a la **Registraduría Nacional del Estado Civil**, o a quien haya delegado expresamente la facultad para recibir notificaciones, o quien haga sus veces, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5º del Decreto Reglamentario 306 de 1992.

1.2. Así mismo y de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, **Ofíciense** a la accionada, para que se sirva informar a este Despacho respecto de los hechos a los cuales hace alusión el escrito de tutela, aportando las pruebas que considera necesarias y en general todos aquellos que tengan relación con la presente acción, para cuyo efecto se les hará entrega de copia de su contenido. De igual manera, requiérase para que el funcionario notificado informe su correo electrónico para efectos de notificaciones judiciales.

En caso de haber sido superada la situación indicada por el accionante, se servirá remitir copias auténticas de la actuación pertinente.

Se concede un plazo de **DOS (2) DIAS** contados a partir de la fecha en que reciba el correspondiente oficio para dar respuesta, bajo los apremios de los artículos 19 y 20 del Decreto 2651 de 1991.

1.3. Se advierte que, una vez se emita sentencia en la acción de tutela de la referencia y en caso de que proceda la apertura del incidente de desacato por incumplimiento por parte de la entidad accionada a la orden impartida, **se solicita a la accionada informe el correo electrónico en el cual recibirá notificaciones**, so pena de que las mismas se realice al correo institucional de la entidad, de conformidad con el Auto 236 de 2013 de la H. Corte

Constitucional.

A la parte accionada.

- Allegue copia íntegra y completa del expediente administrativo contentivo de las actuaciones adelantadas en contra del actor.
 - Informe al Despacho las actuaciones adelantadas respecto del trámite de cancelación por falsa identidad del documento a nombre del señor Rosmer Enrique Calatayud Jiménez, junto con todos los actos administrativos proferidos y sus respectivas notificaciones.
 - Copia de la Resolución 5311 de 7 de marzo de 2023.
2. **NEGAR** la medida provisional solicitada por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
 3. **NOTIFÍQUESE** la decisión a la parte accionante, por el medio más expedito.
 4. Por Secretaría, **dispóngase** lo necesario para dar cumplimiento a esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

[Firma electrónica en seguida]

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA
Juez

MAM

Firmado Por:

Antonio Jose Reyes Medina

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Sala 025 Contencioso Admsección 2

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **df88d89518aa61b0ba5709debb08a0807fbc5f9f141956f213538aff03b9c953**

Documento generado en 12/10/2023 04:06:01 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>